

FORO
CIUDAD
POLÍTICA

FORO CIUDAD POLÍTICA
GRUPO DE TRABAJO DE REACTIVACIÓN

DECÁLOGO
PARA ACTIVAR LA ECONOMÍA URBANA
Y LA CIUDAD QUE NECESITAMOS.
NUEVAS PRÁCTICAS PARA UNA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA URBANA
CON SENTIDO DE EQUIDAD Y DE EMERGENCIA CLIMÁTICA

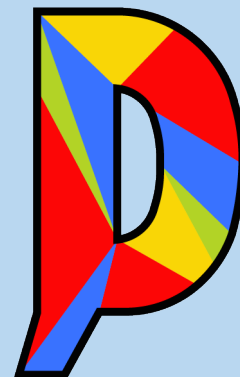
I. DECÁLOGO PARA ACTIVAR LA ECONOMÍA URBANA Y LA CIUDAD QUE NECESITAMOS

CONTEXTO

Chile tiene una larga trayectoria de planes y políticas de recuperación urbana que han tenido distintos orígenes, unos reactivos a propósito de desastres como los terremotos, incendios, erupciones volcánicas y aluviones y otros proactivos, es decir con una intencionalidad política de responder a diversas problemáticas más allá de situaciones coyunturales. Estas iniciativas, han sido llevadas a cabo, mayoritariamente desde una mirada sectorial a través de programas tales como Proyectos Urbanos y, Quiero Mi Barrio-MINVU, Barrios Comerciales-MINECON, Barrios Patrimoniales-SUBDERE, entre otros.

De este modo, se ha acumulado una gran experiencia en planes de reactivación a propósito de diversas crisis económicas, como la crisis sub-prime del 2008 y la crisis asiática de 1998. Hay mucho que aprender de ese recorrido, tanto en sus aciertos como en sus fracasos y limitaciones.

El momento actual nos demanda una respuesta diferente. Lo que pudo funcionar y ser visto como adecuado hace algunos años hoy necesita ser revisado en profundidad. La fractura existente de nuestra sociedad reflejada en el estallido social, y la dramática experiencia de la pandemia del COVID-19, nos señalan claramente que necesitamos hacer cambios en el rumbo del país. Las políticas dedicadas a recuperarnos de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia no pueden hacer caso omiso de todas estas circunstancias. Es importante aprovechar esta oportunidad para reorientar el desarrollo económico y urbano.



ANTIGUAS PRÁCTICAS QUE NO HAY QUE REPETIR

1. Tomar todas las decisiones desde el gobierno central priorizando soluciones uniformes que ignoran la diversidad y opinión de los territorios.
2. Concentrar recursos solo en la infraestructura de megaproyectos urbanos. Simplificando y reduciendo exigencias en su aprobación algunos de alto impacto ambiental.
3. Priorizar las iniciativas que favorecen el uso del automóvil particular.
4. Ignorar las desigualdades de género y territoriales en el impacto de las medidas que se adopten.
5. Desarrollar medidas sectoriales con los habituales parámetros burocráticos, sin coordinación, integración ni evaluación de efectos en la calidad de vida de la población.
6. No reconocer y subestimar la importancia de los cuidados de las personas en situación de dependencia, y su impacto en el empleo, bienestar y autonomía económica de las mujeres.
7. Estimular la construcción de vivienda sin asegurar su calidad, y sin una planificación que se proponga combatir la segregación.
8. Minimizar el aporte de la sociedad civil y las organizaciones sociales y sus nexos con los mercados laborales locales.
9. Ignorar el liderazgo de los gobiernos locales para impulsar una reactivación pertinente a su realidad comunal articulando a los distintos actores públicos y privados.
10. Bajar impuestos a sectores que ya tienen una carga tributaria menor de la que deberían y reducir la reactivación sólo a lo que hacen grandes empresas.

NUEVAS PRÁCTICAS QUE NECESITAMOS PROMOVER Y POTENCIAR

1. Acordar agendas de recuperación con municipios y comunidades, adaptándolas a las necesidades locales y barriales.
2. Incorporar una auditoría de equidad a todas las intervenciones, dando preferencia a aquellas que reducen las brechas de desigualdad y favorecen a los territorios más afectados por la pandemia.
3. Priorizar programas de empleo que atiendan urgencias sociales: trazabilidad de potenciales contagios, refuerzo escolar, acciones de prevención de la violencia, reducción del hacinamiento, generación rápida de áreas verdes, entre otras.
4. Concentrar la inversión en infraestructura vial en proyectos de movilidad sostenible, con énfasis en peatones, transporte público, bicicletas y seguridad vial.
5. Promover la creación de empleo en obras menores de equipamiento, como mejoramiento de veredas, reparación de mobiliario urbano y de calzadas, mantenimiento de espacios públicos, entre otros.
6. Desarrollar un subsidio al cuidado que reporte ingresos para las personas que asumen estas tareas, generalmente mujeres, o que les permitan contratar apoyos para salir a trabajar fuera del hogar. Por ejemplo, impulsar nuevos servicios locales de proximidad que respondan a las necesidades de cuidados de sectores en situación de vulnerabilidad.
7. Promover acciones que tiendan a reducir la brecha digital -en acceso y calidad-, en barrios, ciudades y regiones, agilizando trámites, creando subsidios para infraestructuras de conectividad digital.
8. Promover acciones de alivio económico de doble impacto, tanto a la población vulnerable y como al comercio barrial, inyectando subsidios públicos para la compra de artículos básicos en el comercio barrial.
9. Desarrollar un símil a Servicio País para aportar profesionales a la formulación de proyectos en municipios de bajos recursos e instalar un contingente de emergencia en SUBDERE que apoye la aprobación de proyectos. Así se levantan iniciativas de inversión y se genera empleo para jóvenes profesionales.
10. Priorizar proyectos de vivienda bien localizados, con densidad equilibrada y arriendo protegido. Aprovechar los terrenos públicos disponibles incorporando normas que desalienten a los privados a mantener terrenos eriazos o abandonados.

II. NUEVAS PRÁCTICAS PARA UNA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA URBANA CON SENTIDO DE EQUIDAD Y DE EMERGENCIA CLIMÁTICA.

1. REACTIVACIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN

El Gobierno ha anunciado un programa de reactivación económica centrado en proyectos de inversión en vivienda y obras públicas con impacto en la creación de empleo masivo, que incluye inversión privada. Aunque algo similar se ha aplicado para paliar crisis macroeconómicas previas y asimismo durante el post terremoto 27F, hoy tenemos la necesidad de reactivar la economía después de una pandemia, y una crisis social y económica, de complejidad inédita, lo que requerirá esfuerzos más diversos y de mayor profundidad.

Nos parece que el Gobierno está abordando la crisis actual como una crisis tradicional, dando un sentido de urgencia a aquellas partidas con mayor incidencia en la generación de empleo masivo, producto interno bruto y capital físico. Si bien eso tiene aportes positivos, es necesaria mayor integralidad y prevenir el desarrollo de una estrategia que ha demostrado sesgos concentradores y segregadores con altos impactos urbanos, que han sido reconocidos como parte de los fundamentos del estallido social, y dejan fuera del ámbito de la reactivación gran parte de la economía real y de los mecanismos y engranajes urbanos asociados con la cotidianeidad de los sectores más golpeados por la pandemia.

Si bien la reactivación propuesta, de reorganizar la cartera de las líneas de vivienda bajo el DS19, con proyectos de infraestructura diversa y grandes proyectos urbanos ciertamente puede ayudar, consideramos que ésta no puede desarrollarse a costa de disminuir otras líneas de inversión como cultura, que ha sido fuertemente golpeada por la pandemia, y es una parte necesaria de las demandas de calidad de vida y salud mental de nuestra población en estos momentos. Asimismo, la creación de empleo no puede ser solo en el ámbito de la construcción, porque también ha existido una contracción extrema del sector servicios, comercio y educación, afectando distintos segmentos de la fuerza de trabajo, ramas de la actividad económica, y con repercusiones de género, edad y localización muy complejas.

Así, se trata de no repetir un modelo de reactivación centrado en prácticas que han estado al servicio de las grandes empresas, con la producción de un tipo de edificación vertical con impactos urbanos negativos y capitalización del sector inmobiliario, sin necesariamente mover las agujas del déficit habitacional acumulado. Esto da cuenta de una visión acotada de las problemáticas que deberían ser abordadas para la reactivación. Pensamos, en cambio, que se debería pensar - al menos complementariamente con la reactivación oficial - con el diseño de una serie de iniciativas de visión más amplia e integral de nuestra economía, dando su debido espacio a la economía de la pequeña escala barrial a, como asimismo aprovechar de reducir el amplio espectro de factores de vulnerabilidad que exacerbaban el contagio, la enfermedad y el desempleo en vastos sectores muy definidos de nuestra sociedad.

Entonces, ¿qué debemos reactivar?

Aspiramos a reactivar la economía urbana considerando debidamente su diversidad y complejidad de facetas y segmentos, reconociendo y ponderando los impactos que ha tenido la pandemia y sus claros nexos con la desigualdad social y urbana. Para esto es necesario transparentar, humanizar y territorializar los diversos nichos de la economía urbana que fueron afectados significativamente. Se busca recuperar y revivir la micro economía del país con realismo e integralidad. Reactivar la ciudad, reparando daños al tejido socio-económico y preparándola mejor para un nuevo contexto con mayores capacidades de resiliencia y menores vulnerabilidades económicas asociadas entre otras causas al alto grado de informalidad laboral y precariedad del sistema de protección social.

Fortalecer el nivel local, a nivel comunitario, barrial y municipal a partir de los aprendizajes que ya tenemos es clave para enfrentar una eventual segunda ola del coronavirus o incluso de emergencias sanitarias y sociales similares en futuros próximos que no pueden ser enfrentadas con los mismos sesgos y desigualdades seculares, como si nada hubiese pasado este año 2020 en Chile.

La pandemia también ha develado la precariedad económica en que se encontraban los trabajadores chilenos, con altas tasas de informalidad y sin adscripción a un sistema de seguridad social. Hoy cerca del 30% de las y los trabajadores urbanos no están empleados, afectando especialmente a mujeres y jóvenes. Una cosa es trabajo y otra es empleo. Estos trabajadores generan ingresos en el mercado informal de la economía y no han podido acogerse al seguro de protección del empleo que se adoptó durante la pandemia, presionando, por lo tanto, fuertemente la asistencia social de las municipalidades, las que han visto disminuir sus recursos para compensar el frágil modelo económico sobre el cual hemos construido nuestras ciudades.

Por otro lado, el escenario urbano del trabajo y los soportes de los desplazamientos con objetivos laborales han sido remecidos por la pandemia de un modo inédito a nivel mundial, como no ocurría desde fines de la segunda guerra mundial, y que los efectos de esta contracción de la ciudad sobre la generación de ingresos ha sido muy fuerte, lo que en el caso de Chile tuvo un gran vector de vulnerabilidad en la desigualdad, segregación y sub dotación de equipamientos instalada en la urbe donde viven las mayorías de población en edades activas y los miembros dependientes de su ingreso.

Una reactivación integral y efectiva exige instalar nuevas prácticas de gestión institucional y colaboración transversal, tanto a nivel de gobierno sectorial, regional y local como de la ciudadanía, academia y entidades no gubernamentales, con perspectiva amplia y científica, sin sesgos políticos ni pre conceptos económicos reduccionistas. A partir de entender que el elevado PIB per cápita previo se esfumara en la microeconomía y cotidianidad: identificando territorios, segmentos, y actividades que fueron golpeados, levantando proyectos adecuados, diversos, y rápidos, con un seguimiento de la ejecución e impacto medible y verificable.

A las ciudades y barrios de Chile no les bastan solamente los traspasos de recursos públicos a empresas para obras de infraestructuras, por muy movilizador de empleo masivo coyuntural que sea, más aún ideado desde una lógica sectorialista, con miles de supuestos frágiles, y necesitan transferencias directas a los gobiernos locales para la dinamización de los almacenes y la regeneración urbana de los barrios que impacten la vida real de las personas.

El abordaje de la sindemia (superposición de pandemias y otras crisis) plantea desafíos de enorme complejidad en los grandes centros urbanos, como Iquique, Antofagasta, y las áreas metropolitanas de Valparaíso, Santiago y Concepción, donde sucesivamente se han manifestado indicadores de contagio, mortalidad, desempleo y contracción económica derivadas de la pandemia. También deben ser parte de una reactivación inteligente los territorios que se mostraron como refugios de normalidad frente a la globalización de la pandemia, donde muchos son circuitos de localidades de menor escala urbana y rural, ignorados por décadas tanto por la inversión pública como privada pese a plantear importantes oportunidades para el asentamiento humano y emprendimiento.

Se necesita una reactivación consciente de las consecuencias de malas decisiones y vacíos enormes de cobertura sesgadas por la premura de la emergencia y el desconocimiento de la profundidad y plazos de los efectos de la pandemia. Una reactivación debe ser sustentable e integral, no solo macroeconómica. No debemos olvidar la crisis climática subyacente, y en particular la situación de exposición y vulnerabilidad de Chile y su territorio que se vincula a desigualdades sociales y urbanas que explican que la pandemia haya sido vivida de formas muy contrastantes según el barrio y comuna de residencia.

En definitiva, la crisis múltiple que nos golpeó abre oportunidades para aumentar la resiliencia de nuestras ciudades y sus habitantes, transformando los barrios a través de políticas robustas basadas en la comprensión de la realidad, con mirada de largo plazo, pero con acciones - en el corto plazo- que inciden de forma eficiente y eficaz en los requerimientos de adaptación, mitigación y gestión de riesgos de desastres, a los cuales Chile ha adherido, y que ha plasmado en diversos documentos nacionales de amplio consenso, como los desarrollados al alero del Acuerdo de París y de la COP 25, donde la formulación de estrategias de reactivación y adecuación de factores de riesgo será un requisito fundamental.

Así, entendemos que la reactivación puede ser un proceso que ayude a la recuperación del país real y

completo, mostrando con ejemplos concretos como acuerdos transversales y diálogos a la altura del interés público son posibles, y pueden expandirse y madurarse durante el próximo proceso constituyente.

2. PROPUESTAS DE NUEVAS PRÁCTICAS PARA LA REACTIVACIÓN

La reactivación debería considerar un horizonte de mediano y largo plazo, pero con metas concretas que orienten la acción en los próximos dos a cuatro años; esto es, más allá de una reactivación con las características anunciadas por el Gobierno, con acciones que no tienen, en nuestra opinión, la fuerza que requeriría un desafío como éste. La reactivación también implica el cambio inteligente de la matriz productiva, una lectura completa de los efectos de la pandemia sobre diferentes ramas y sectores de la economía y de cuales factores territoriales y urbanos de vulnerabilidad pueden ser modificados mediante obras financiadas en nombre de la reactivación, y tener especial atención de la distribución escala de barrio y municipio en el mapa final de localización de las acciones .

La reactivación debiera potenciar el rol de los gobiernos locales como articuladores de la gestión del Estado, el sector privado y la sociedad civil, bajo un modelo de trabajo colaborativo e integrador de acciones multi-sectoriales. Esto es coherente con la valoración del ámbito local y barrial, que ha demostrado su gravitación e incidencia tanto en el contexto del estallido social como en la crisis del coronavirus.

La reactivación debe estar guiada por un examen estratégico detallado y localizado de dónde mitigar, prevenir o reconvertir los factores territoriales, sociales y económicos encadenados detrás de la pandemia y sus crisis a diferentes escalas.

La reactivación debería ser capaz de apoyar y potenciar la capacidad de los individuos, familias y colectivos de adaptarse a nuevas condiciones de equidad. Las diversas prácticas ciudadanas para enfrentar la crisis económica están extremando la creatividad de las personas, y esto requiere ser comprendido y encauzado con proyección de futuro. Se trata de prácticas como: a) respuesta transitoria a la emergencia y desempleo como las "ollas comunes"; b) prácticas con inercia que se proyectarán en el tiempo generando nuevas oportunidades y desafíos como servicios delivery de alimentos.; c) prácticas que evolucionarán hacia nuevos horizontes como el emplazamiento de microferias barriales d) prácticas de fortalecimiento de la red local de almacenes. La reactivación debería también considerar los impactos de la disminución de financiamiento en la gestión municipal y, en consecuencia, de su reasignaciones presupuestarias para aumentar el gasto social. Esto debería afectar a la inversión municipal y el estándar de los servicios municipales, es hora de acelerar las transferencias de decisión a los niveles subnacionales.

Los efectos de la pandemia han sido de amplio espectro, y por lo mismo debiese existir cierta proporcionalidad en los efectos reactivadores buscados por la inversión por segmentos, grupos socioeconómicos, y territorios sin cegarse frente a esta realidad por planes guiados por axiomas de cualquier tipo (sean focalizadores, economicistas o clientelares).

2.1 DIAGNÓSTICO DINÁMICO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES E IMPACTOS

La reactivación requiere la existencia de sistemas de gestión de información que capitalicen la gran cantidad de información disponible de manera dinámica y georeferenciada. Estos sistemas deben tanto apoyar la toma de decisiones y las acciones concertadas, como también constituirse en plataformas de transparencia que apoyen la construcción de confianzas entre Estado, el sector privado y la sociedad civil, y además sirvan de base de seguimiento de avances y evaluación de impactos de la reactivación.

2.1.1 MONITOR DE LA REACTIVACIÓN

La implementación de la reactivación requiere especial énfasis en una focalización diferente considerando criterios territoriales, económicos y sociales que potencien el uso más eficiente y efectivo de los recursos públicos en revivir y adecuar la micro economía golpeada por la pandemia y mejorar en el proceso nexos con la infraestructura o capital físico y con el capital humano y tecnología de la población activa. Esto implica contar con sistema de gestión de información que sea sensible a la características de las distintos tipos de beneficiarios o asociados y sus circunstancias post pandemia. Esto implica un sistema de diagnóstico dinámi-

co que integre la información disponible y haga seguimiento de variables clave para la toma de decisiones y evaluación oportuna. El sistema debe apoyar la gestión y al mismo tiempo transparentar los procesos de asignación de recursos, su avance e impacto.

Esto implica la caracterización de la población según las formas en que están obteniendo o no sus ingresos. Por ejemplo: a) Población que tenía un empleo estable que perdió el empleo; b) Población que no tenía un empleo estable que está sin ingresos; c) Población pasiva que fue afectada en su economía, operación en el entorno y sus factores protectores y amenazas urbanas.

Por lo tanto, se propone la formalización de un Monitor de la Reactivación que entregue un diagnóstico territorial de los efectos de la pandemia a distintas escalas (regional, ciudad, comunal y barrios), a fin de definir una línea de base y luego un seguimiento del proceso.

2.1.2 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE ACCIONES

Este sistema de diagnóstico dinámico debe complementarse con un mecanismo de asignación de recursos que asegure una adecuada focalización. Por lo tanto, proponemos la formalización de una Matriz de Priorización de Acciones que permita orientar la inversión hacia determinados territorios prioritarios de intervención. Esto implica cruzar la caracterización en términos de ingresos con otras dimensiones tales como: condiciones socio económicas de base, indicadores COVID-19 de mortalidad, contagios cada mil habitantes, atributos urbanos y bienestar territorial, déficit habitacional cualitativo, hacinamiento y niveles de inversión, entre otras variables.

2.2 FORTALECIMIENTO DE ECONOMÍAS LOCALES CON FOCO EN EL CAPITAL HUMANO

El abordaje de la generación de ingresos con una mirada en el desarrollo económico sostenible debe considerar el fortalecimiento de las economías locales con foco en las personas y sus oportunidades de desarrollo. Por lo tanto, es necesario abordar el tema del empleo reconociendo las singularidades entre los grupos afectados y diferenciando empleo y emprendimiento, poniendo foco en el capital humano como denominador común.

Identificar acciones que promuevan la economía local y la creación de empleos dignos con foco en grupos especialmente afectados como mujeres y jóvenes. Abordar el desempleo requiere tener conciencia de las particularidades de los distintos tipos de desempleados, sus estrategias para salir adelante y la importancia de los niveles de informalidad. Los temas que se deberían abordar son los siguientes: a) Ferias libres, fenómeno de los coleros y microferias; b) Negocios de barrio, venta a domicilio; c) Adaptación de las MIPYMES (micro, pequeña y mediana empresas).

2.2.1 APOYO A GRUPOS MÁS VULNERABLES

Referido a apoyar a la población que no tenía un empleo estable y dejó de percibir ingreso. Por otro lado, trabajadores por cuenta propia reconocidos hoy como emprendedores precarios. En ambos casos, la crisis está afectando las capacidades de consumo de primer y segundo orden. Existe a nivel local escasa información que permita orientar políticas públicas pertinentes a las realidades comunales y diseñar estrategias que impacten el mercado del trabajo, sabemos que el nuevo escenario requerirá un mercado laboral flexible y por lo tanto, también nuevas competencias.

De este modo se debe avanzar en siguientes acciones: a) Fortalecer el capital humano, para que aspire a mejores salarios a través de capacitación de oficios específicos que requiera el mercado, competencias laborales tecnológicas; b) Fortalecer a las PYMES para que ejecuten obras menores de mejoramiento en el barrio; c) Reducir la brecha digital, tanto a nivel de infraestructura disponible como de equipos tecnológicos que permitan el teletrabajo y la teleeducación a las familias vulnerables.

2.2.2 DAR CONTENCIÓN A FAMILIAS DE CLASE MEDIA EN CRISIS

La clase media chilena es un mosaico amplio y diverso de realidades laborales y familiares cuyos vínculos con la economía tanto en términos de ingresos como de financiamiento de costos fijos elevados ya estaban fuertemente tensionados y endeudados antes de la pandemia por el modelo privatizador y focalizador imperante.

Se trata de sectores que, posterior a la pandemia, se bifurcan en segmentos algunos con empleos en servicios que han podido sortear la pandemia migrando al teletrabajo y disponen de condiciones físicas adecuadas, otros que no han perdido fuentes de empleo pero están muy tensionados por la carencia de recursos y condiciones adecuadas al teletrabajo o por la caída de su volumen de trabajo. Otros, la mayoría son casos que han experimentado la pérdida de empleos asalariados formales en el sector privado, otros que sin perder fuentes de empleo dependían fundamentalmente de su componente de ingresos variables o por producto y han experimentado caídas de su ingreso real, sumándose empleados y gerentes de empresas y comercios de diferente escala que han quebrado o están cerca de hacerlo. Existe en todos los casos un límite de la formalidad e informalidad de ingresos que el propio modelo económico imperante promovió.

En todos los casos, el denominador común de las diversas capas de clases medias chilenas, incluyendo grupos C1 al C3, es el sobre endeudamiento previo producto de un desfase estructural entre monto y flujo de ingresos y costos fijos vinculados al financiamiento de educación, salud, previsión privada, agravado por cobros de intereses comerciales e hipotecarios. La crisis de este amplio segmento de la ciudad es extremadamente complejo y, trascendente para efectos de una reactivación económica real del país tanto por el lado de la demanda como oferta. Un efecto de corto plazo evidente es la migración potencial de gran cantidad de familias al sector público o subvencionado, sin existir planes de contingencia claro en estos sectores vinculados a municipios además. Otras medidas tienen que ver con la debilidad de la regulación y poder de negociación efectivo frente a grandes empresas comerciales que reportan utilidades enormes durante la pandemia

Por lo tanto, se recomiendan las siguientes acciones: a) Apoyar a estas familias para asegurar su ejercicio del derecho a la salud y a la educación, con una atención especial de familias con hijos en edad pre escolar y básica, . Por ejemplo, maximizar las nuevas tecnologías en la educación a distancia; b) Apoyar a los emprendedores en el desarrollo de proyectos (última milla); c) Explorar el potencial de la descentralización de CORFO; e) Apostar por el capital humano existente en los sostenedores de familias con pérdidas de ingresos y promover su asociación y emprendimiento hacia la economía circular en fondos concursables y licitaciones públicas del sistema ChileCompras; f) Identificar necesidades de apoyo en el acceso a infraestructura y conectividad adecuadas al teletrabajo y tele educación; g) Generar Fondos de Emergencia para proyectos innovadores de Cultura y Deporte presentados por actores y profesionales de estas ramas de servicios, drásticamente cerrados por la pandemia.

2.2.3 APOYO A ADULTOS MAYORES Y POBLACIÓN DEPENDIENTE

Aquellas personas que requieren de cuidados especiales como adultos mayores niños y jóvenes están siendo especialmente afectados en su economía de entorno y en sus factores protectores. Es por este motivo que se requiere poner especial preocupación por el acceso a la salud y a otros servicios. En particular, el caso de las personas que cuidan, tanto los familiares como quienes prestan ese tipo de servicios.

Por lo tanto, se recomiendan las siguientes acciones: a) Reconocimiento de movimientos que deben realizar estas personas y acciones que permitan disminuir los traslados y la potencial exposición al virus.. b) Subsidios al traslado de las personas que deben dar servicios de cuidado a adultos mayores, niños y jóvenes; c) Potenciar el comercio de barrio a través de monederos virtuales en el comercio local.

2.3 MOVILIDAD SUSTENTABLE Y CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

Aprovechar el momento histórico para acelerar las inversiones en infraestructura sustentable, postergadas o no priorizadas, que promuevan con fuerza los desplazamientos por la ciudad de manera segura y además permitan el esparcimiento y convivencia en el espacio público, desde un punto de vista sanitario y también en coherencia con la agenda de cambio climático. Los temas que se debiera abordar son: a) Transporte pú-

blico digno, eficiente y seguro en términos sanitarios y libres de acoso y violencia; b) Espacio público para peatones con distancia social; c) Lograr una red de ciclovías integradas en cada ciudad; d) Áreas verdes como espacios de encuentro y esparcimiento; e) Priorizar infraestructura verde y criterios de adaptación y mitigación en las obras públicas.

Uno de los principales problemas de equidad en nuestras ciudades, es que todo el equipamiento y mobiliario urbano, así como la accesibilidad a servicios básicos, es tremendamente segregada por estrato socio-económico. Proponemos que los fondos municipales, por habitante y m², sean los mismos en todas las comunas de cada ciudad. Esto va a exigir un aumento importante de la distribución que hoy ya se hace al Fondo Común Municipal.

2.3 ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD SUSTENTABLE

La forma en que se utilizarán los espacios públicos y cómo se movilizará la población estará determinada por las nuevas prácticas y el modo en que se adapte la ciudad. El espacio público y movilidad sustentable deben potenciar el foco en las personas en su calidad de vida y seguridad durante los traslados.

2.3.1 INVERSIÓN PARA EL TRÁNSITO PEATONAL

La situación de los peatones en nuestras ciudades es precaria, tanto en la seguridad como en la comodidad de sus desplazamientos, lo que se verifica en especial en los barrios y comunas de menores recursos. A esto se agrega en pandemia los riesgos sanitarios por la proximidad entre usuarios del espacio público.

Proponemos que una parte significativa de la reactivación en obras se oriente al ensanche y pavimentación de las veredas de dimensión insuficiente o en mal estado, y al mejoramiento físico y en sus condiciones de seguridad de todos los trayectos peatonales, incluyendo aquellos en parques, áreas comerciales, cruces de calles, pasarelas, etc. Además, se propone la peatonalización de calles en centros cívicos y el establecimiento de zonas de calmado de tráfico en áreas residenciales. Especial atención debe haber en la provisión de condiciones para los peatones con movilidad reducida. En resumen, una gran campaña de inversión urbana pro peatón y pro accesibilidad universal.

2.3.2 PROVISIÓN DE CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO CICLISTA

Las ventajas sanitarias y ambientales del tránsito ciclista no se reflejan en la acción del Estado para proveer mejores condiciones de seguridad y fluidez a sus desplazamientos.

Se propone la construcción en todas las ciudades de redes densas y conexas de ciclovías de alto estándar. Lo anterior debe ir acompañado de la habilitación de áreas e instalaciones para el estacionamiento de bicicletas en diversos puntos de las ciudades y la provisión de condiciones físicas para el intercambio modal con el transporte público (buses, Metro y trenes urbanos).

2.3.3 INVERSIÓN PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

Si bien el transporte público seguirá siendo el principal medio de transporte de la población, especialmente en ciudades grandes o de tamaño medio, la pandemia impone la disminución de la aglomeración al interior de los vehículos y de los consiguientes riesgos sanitarios.

Se propone que se invierta, para aumentar las frecuencias y disminuir la ocupación, en un aumento de la dotación de vehículos y, especialmente, en infraestructura exclusiva para transporte público que eleve la velocidad de circulación. Esto debe ir acompañado de una mayor priorización a los buses en el uso de las calles, con fiscalización.

La inversión en mayor infraestructura para peatones, bicicletas y transporte público en nuestras ciudades significa -en un espacio vial finito- la disminución de la vialidad disponible para el modo de transporte menos sostenible, el automóvil, lo que se tendrá que manifestar tanto en las pistas de circulación, como en la parte de la calzada destinada a estacionamiento. No obstante, la pandemia está generando nuevos hábitos que podrían facilitar este proceso, dado que las medidas de confinamiento obligan a la disminución del uso del automóvil y tienden a generar una nueva rutina de actividades por medio de la comunicación a distancia.

Además de las obras de infraestructura, se requiere el fomento de la movilidad sostenible a través de normas de tránsito que la protejan y la prioricen, y de la educación a la población en los hábitos de convivencia entre usuarios de distintos modos de transporte en el espacio público.

2.4 VIVIENDA, REGENERACIÓN URBANA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Nos referimos al funcionamiento de la ciudad y sus servicios, en particular los servicios locales afectados por la pandemia, ya sea porque no han podido ser provistos o porque su calidad y oportunidad han decrecido, amplificando la precariedad de los barrios vulnerables. También implica abordar los desafíos de vivienda bien localizada y el aumento de campamentos. Los temas que se deberían abordar son: a) Establecimientos de educación y su cadena de operación; b) Servicios municipales y sociales; c) Brecha digital de las familias, estudiantes, trabajadores y ancianos; d) Abordaje de la violencia como desafío transversal. Estas acciones son consistentes con la propuesta de iguales fondos municipales por habitante y m² mencionada en el punto anterior; e) Servicios de cuidado de niños y niñas, personas adultas mayores y personas con alguna discapacidad.

2.4.1 VIVIENDA BIEN LOCALIZADA

Proponemos considerar esta crisis como una oportunidad para intervenir la ciudad bajo una lógica de reparación equitativa, dotando de equipamiento e infraestructura a las áreas más vulnerables de la ciudad con la reorganización de programas de inversión y la reasignación de recursos para mejorar el stock construido y sus barrios de manera integral.

Los temas que se debieran abordar son: a) Estrategias de vivienda bien localizada, social y asequible, en arriendo y en propiedad para la producción de vivienda nueva financiada por la reactivación, previniendo impactos urbanos y externalidades negativas que agraven la vulnerabilidad y congestión en el acceso a bienes públicos entendiendo que, el negocio de la producción de vivienda debe ajustarse a modelos post pandemia como la ciudad de 15 minutos; b) Infraestructura social y equipamiento comunitario para comunas y barrios más afectadas por pandemia sanitaria y económica buscando adecuar sus territorios a mínimos de infraestructura que han revelado como indispensables las cuarentenas y emergencia sanitaria como las exigencias de teletrabajo y tele educación; c) Identificar planes y zonas de inversión inteligentes y circulares en los instrumentos de planificación e inversión en línea con las posibilidades de la nueva ley de aportes urbanos e integración; d) Generar un Fondo Concursable de Proyectos de Mejoramiento y Ampliación de Viviendas en Zonas más Afectadas por la Pandemia Sanitaria, que consolide la opción de cohabitación de familias en forma segura (en Chile es mucho mayor el déficit cualitativo de vivienda que el cuantitativo) dando posibilidades de ejecución para cooperativas de maestros y micro empresas locales y opciones de tarjetas de crédito especiales para compra de materiales para proyectos seleccionados en grandes tiendas.

2.4.2 REGENERACIÓN URBANA

La reactivación es una oportunidad para el potenciamiento de ciertas áreas de las ciudades que tienen buenos atributos urbanos y permitir el aumento de población con acceso a estos atributos. Esto implica no solo aprovechar la disponibilidad de suelos públicos y fiscales con buena localización, sino que aprovechar las capacidades del Estado en el desarrollo de proyectos urbanos y los mecanismos para integrar el sector privado en el desafío.

En este sentido, los Servicios de Vivienda y Urbanización de cada región podrían desarrollar proyectos urbanos de integración social en alianza como el Ministerio de Bienes Nacionales, las FFAA, Ferrocarriles del Estado y privados. La gestión de los proyectos debería tener una mirada sustentable que asegure el desarrollo de estas unidades urbanas a través de diversos mecanismos de financiamiento y tenencia. Esto implica abordar de manera directa la generación de nuevos barrios bajo modelos de gestión urbana y gobernanza local.

2.4.3 INFRAESTRUCTURA SOCIAL ORIENTADA A LAS PERSONAS

El futuro de las ciudades y las sociedades democráticas se basa no solo en valores compartidos, sino también en la infraestructura social: plazas y parques, bibliotecas, equipamiento deportivo y espacios de organizaciones cívicas donde se forman conexiones cruciales. Si la infraestructura social es robusta, es más probable que las personas establezcan vínculos con los vecinos e inviertan en sus comunidades. Una infraestructura social

débil y descuidada lleva a las familias e individuos a valerse por sí mismos.

El mejoramiento de la oferta de equipamiento barrial y comunal puede ser potenciado a través de acciones colaborativas de entidades municipales, regionales y sectoriales. En términos generales, la infraestructura social es el conjunto de arreglos organizativos e inversiones en los sistemas, relaciones y estructuras urbanas con el objetivo de mejorar su resiliencia y sustentabilidad. Esto implica que los equipamientos urbanos cumplan diversas funciones simultáneas y estén pensados para adaptarse a condiciones y demandas cambiantes.

En este sentido, las inversiones de las reactivación deberían promover equipamientos locales que entreguen diversas soluciones a los ciudadanos en la misma línea que los denominados “corazones de barrio”. Esta infraestructura social debe ser parte de iniciativas mayores que enfrenten desafíos como el cambio climático y la delincuencia, al tiempo que construyan cohesión social. Estas capacidades fortalecidas a nivel local deberían ayudarnos a navegar la crisis del coronavirus y las futuras crisis.

2.5 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LOCAL

Los gobiernos municipales son quienes actúan en la primera línea de la respuesta a la crisis y también deberían constituirse en la base de la transformación urbana y las nuevas prácticas de transformación. Por lo tanto, es el momento de actuar en el fortalecimiento real de las municipalidades. En este sentido, se proponen acciones respecto al financiamiento y gestión municipal, los aportes del sector privado y el apoyo específico a la gestión municipal.

2.5.1 FINANCIAMIENTO Y GESTIÓN MUNICIPAL

Diversificar y aumentar el financiamiento municipal a través de la integración de acciones de diversas fuentes que puedan ser coordinadas por el municipio. Esto implica fortalecer las capacidades de gestión del municipio mediante modelos de gestión integrada y transformación tecnológica que aumenten la eficiencia del municipio.

Se propone simplificar el sistema de acceso a financiamientos como el Programa de Mejoramiento de Barrios en su modalidad de Emergencia de la SUBDERE, pero bajo nuevas condiciones que aseguren la integración y de acciones de diversas fuentes, donde estos fondos potencien la vinculación y el inicio de los procesos de coordinación.

2.5.2 APORTES DEL SECTOR PRIVADO

Participación del sector privado promoviendo mecanismos de colaboración que movilicen recursos para el co-financiamiento de iniciativas barriales e infraestructura de escala comunal que viabilicen proyectos de regeneración urbana en materia de vivienda pública y espacios públicos de alto estándar. .

2.5.3 PROGRAMA DE APOYO A MUNICIPIOS “SERVICIO REACTIVACIÓN”

La gestión municipal debe ser reforzada en su capacidad instalada para el diseño, postulación e implementación de proyectos de reactivación. Para ello se propone un programa de dos años renovables que permita la contratación de profesionales para potenciar la producción de proyectos sociales.

Este programa podría ser similar al Servicio País, incorporando tanto a jóvenes profesionales como también profesionales con mayor experiencia que se encuentran desempleados. El programa podría contar con financiamiento mixto público privado, pero sobre una base de financiamiento público que podría provenir de líneas como Acciones Concurrentes (AACC) de SUBDERE que es un instrumento de financiamiento que apunta a financiar aquellas acciones previas a la Prefactibilidad de un proyecto municipal.

FORO CIUDAD POLÍTICA
Grupo de trabajo de Reactivación

Participantes que aportaron en la discusión y redacción de este documento.

Aldo Ramaciotti
Camilo Arriagada
Carlos Aguirre
Carolina Leitao
Carolina Tohá
Gabriela Elgueta
Gonzalo Durán
Hernán Silva
Javiera Maira
Juan de Dios Ortúzar
Juan Manuel Sánchez
Olga Segovia
Paulina Astudillo
Pedro Donoso
Raúl Erazo
Roberto Moris
Nieves Rico